ESTRATEGIA

ISSN-0185-6391

REVISTA DE ANALISIS POLITICO

- La venta de empresas paraestatales en México

Alonso Aguilar M.

- Vigencia del cardenismo

Fernando Carmona

□ Después de las elecciones...
más conciencia,
más organización
y más fuerza

□ Los costos
de la política del Estado

82

julio
agosto
1988

economía:	
Los costos de la política del Estado	1
problemas sociales:	
La venta de empresas paraestatales en México / Alonso Aguilar M.	7
perfil regional:	
La frontera norte: una larga lucha por la independencia / Alejandra Salas-Porras Soule	31
Vigencia del cardenismo / Fernando Carmona	42
situación política:	
Más conciencia, más organización y más fuerza	57
Un incidente revelador	86
Guatemala: nuevas posibilidades	90

Foto portada: Julio Argumedo (El Universal)

Estrategia. Revista de análisis político. Publicación bimestral de PUBLICACIONES SOCIALES MEXICANAS, S. A. México, Año XIV, Vol. 4, No. 82, julio-agosto de 1988. Dr. Vértiz 1295-202 Col. Letrán Valle, 03650 Delegación Benito Juárez, D. F. o Apdo. Postal 73-206. 03020 México, D. F. Tel. 604-75-39.

DIRECCION COLECTIVA: Alonso Aguilar M., Ignacio Aguirre, Fernando Carmona, Jorge Carrión, Ignacio Hernández. GERENCIA: José Rodríguez M. SUBGERENCIA: Perfecto Bello H. DISTRIBUCION Y PROMOCION: Norma Gamboa C. COLABORADORES: Luis Carrión, Rodolfo Domínguez, Ezequiel Maldonado.

AUTORIZADA como correspondencia de 2a. clase Registro DGC Núm. 0050675 características 229251 209.

SUSCRIPCIONES: En México, anual ordinario 15,000 pesos; anual de apoyo 30,000 pesos; anual institucional 30,000 pesos. En el extranjero: 25 dólares EUA. Precio del ejemplar 3,000 pesos; ejemplares atrasados 3,000 pesos.

LA VENTA DE EMPRESAS PARAESTATALES EN MEXICO

Alonso Aguilar M.

Las empresas paraestatales se han vuelto entre nosotros objeto de creciente atención. La prensa, casi todos los días, se ocupa de ellas. A menudo lo hacen también economistas, empresarios privados, dirigentes políticos y altos funcionarios del gobierno. El inusitado interés procede de la decisión del Estado de —como hoy se dice— “desincorporar”, o sea vender, transferir, fusionar o liquidar muchas de las empresas en que tenía participación.

El tema se discute a menudo a partir de posiciones simplistas. Desde el gobierno, por ejemplo, se sostiene que al deshacerse de un modo u otro de numerosas empresas, el Estado no sólo no renuncia a la rectoría económica que constitucionalmente le corresponde, sino que más bien la refuerza. “Adelgazar” al Estado —se dice— no significa debilitarlo. Lo que en realidad se está haciendo es prescindir de empresas que no son estratégicas ni prioritarias. En su muy comentado discurso de Tepic, hace unas semanas, el presidente de la Madrid se ocupó del asunto. “Hémos vendido a los particulares —declaró— [...] empresas que no son indispensables para la conducción efectiva de la rectoría económica del Estado [...].”, y se han liquidado otras porque “[...] habían cumplido su propósito o [...] ya no eran viables [...]” O sea que “el Estado se ha desprendido de [...] lo secundario, de lo accesorio, de lo que pueden manejar mejor los particulares [...]”¹.

La posición del gobierno no es compartida por muchos. “La intervención estatal —expresaba hace unos días el conocido industrial Juan Sánchez Navarro— es populismo.” Según él, el Estado debiera limitarse a proveer servicios educativos y de sa-

¹ *Excelsior*, 7 de mayo de 1988.

lud, y a construir una infraestructura física y económica que sirva al capital privado, pues éste debe ser el eje del proceso económico. Lo que quiere decir que, para muchos empresarios, el Estado sigue interviniendo en campos en que no debiera hacerlo.

Lo cierto, alegan otros, es que el gobierno no se decide a vender o lo hace lentamente y con métodos inadecuados. "[...] la desincorporación de empresas estatales, vista desde la expansión gubernamental de 1977-82, 'no es relevante' [...]" —sostiene el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. "La actual administración autorizó la desincorporación de 450 empresas, pero —hasta mayo de 1987— sólo se ha cumplido en 38%. En rigor, sólo se han vendido 96 empresas [...]" El Estado controla 101 empresas financieras e inmobiliarias, "[...] cuya transferencia al sector privado sería una buena forma de ampliar la racionalización del sector paraestatal". Pero no habrá verdadera racionalidad, agrega el CEESP, "mientras no exista una clara delimitación de las áreas en las que no debe intervenir el gobierno." Este, "en cambio, no tiene por qué limitar la inversión del sector privado, sea nacional o extranjero [...]" ².

En otros círculos, en cambio, se piensa que el gobierno está vendiendo todo lo que puede, especialmente en la industria. "El que el Estado se retire del sector industrial —comenta el economista Benito Rey Romay—, es un viejo sueño, de décadas, del sector privado. El gobierno, como un hada madrina, le está cumpliendo ahora ese deseo [...]" Este gobierno está desmantelando al Estado [...]" "El grupo en el poder coincide fielmente con la mentalidad empresarial. Hasta ahora ningún gobierno había mencionado la posibilidad de vender las empresas estatales [...]" Pero el actual, "[...] rindiendo culto a la ideología del superavit, las traspasa al sector privado [...]".

Un hecho indudable es que falta información sobre lo que se está haciendo con las empresas estatales, y es grave que esto ocurra en torno a una cuestión que puede ser tan importante para la nación. Con frecuencia circulan noticias que explicablemente son motivo de inquietud. Y lo cierto es que casi nadie sabe qué está pasando y, concretamente, por qué se venden determinadas empresas, quiénes y cómo lo deciden, en cuánto se venden y en qué condiciones, a quién, y cuáles son las consecuencias de tales operaciones.

² *Proceso*, No. 553, México, 8 de junio de 1988, pp. 22 y 23 y hace apenas unos días, el presidente de la *Concamín* —Bortoni— sostenía que la privatización de la economía debe ser total e irreversible. *El Día*, 18 de julio de 1988, p. 5.

Un poco de historia

Desde el siglo pasado se establecieron en México algunas empresas estatales. Pero el atraso económico del país y las ideas liberales en boga entonces y conforme a las cuales el Estado era un guardián al que correspondía apoyar a los particulares y no intervenir directamente en la economía, determinaron que sólo excepcionalmente se crearan tales empresas y que en general se limitaran a prestar ciertos servicios como el telégrafo y la acuñación de moneda.

En los años veinte del siglo que corre, las cosas cambiaron. La cruenta lucha armada, como se sabe, destruyó buena parte de la riqueza y provocó el cierre de múltiples empresas. En tales condiciones, y habiendo mucho por reconstruir y reorganizar, el Estado empezó a participar activamente tanto en la forja de una infraestructura necesaria para promover el desarrollo económico, y que la empresa privada no podría proveer, como en el establecimiento de ciertas empresas e instituciones. En realidad así surgieron organismos como la Comisión Nacional de Caminos y la de Irrigación, e instituciones como el Banco de México —o sea el banco central— y el Banco Nacional de Crédito Agrícola, en 1925 y 1926.

En los años treinta, en parte a consecuencia de la gran depresión y en parte debido a las reformas cardenistas y al impulso que a partir de entonces se dio al desarrollo económico, el radio de la acción estatal se amplió sensiblemente y las empresas del Estado se multiplicaron. En efecto, por esos años se fundaron instituciones tan importantes como la Nacional Financiera y el Banco Nacional Hipotecario, y poco después el Ejidal y el de Comercio Exterior, así como Ferrocarriles Nacionales de México, la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.

La mayor intervención estatal hizo crecer la inversión pública, lo que sin embargo, hasta la década de los cuarenta se destinó sobre todo a transportes y comunicaciones y a otras actividades no directamente productivas. Posteriormente, en cambio, la industria empezó a ser objeto del reciente interés y el Estado intervino a través de varias empresas en la siderurgia, la de fertilizantes, la construcción de carros de ferrocarril y la fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo, y la petroquímica. La compra de la principal empresa de electricidad y más tarde la nacionalización de esta industria fue sin duda importante, y a ella se agregó, la intervención en nuevos y variados campos, algunos de significación y otros secundarios —azúcar, emparadoras, tabaco, textiles— en los que la presencia del Estado adoptó caracteres muy diversos.

Pero fue sobre todo en los años setenta, y en particular en los de más rápido crecimiento que acompañaron al auge petrolero, cuando las empresas y organismos estatales se extendieron más de prisa. En ese breve lapso Pemex y otras grandes empresas se desarrollaron con rapidez. La Nacional Financiera y el Banco Mexicano Somex promovieron o ampliaron su participación en numerosas empresas, y el Estado creó múltiples fondos fiduciarios a través de los cuales se manejaron cuantiosos recursos financieros.

Al concluir el gobierno de López Portillo, en 1982, o sea inmediatamente después de la nacionalización de la banca, los voceros oficiales sostenían que el llamado sector paraestatal se había fortalecido grandemente, lo que afirmaba la rectoría económica del Estado. Los más conservadores, sin embargo, criticaban duramente la política seguida por el gobierno y en particular la nacionalización bancaria, y alegaban que las empresas estatales operaban mal y eran una de las principales causas del déficit presupuestal. Mas lo cierto es que la significación de dichas empresas y aun de la acción estatal en su conjunto, aunque cada vez mayor, era similar a la de otros países y podría decirse, de nivel medio, si se piensa en los ingresos y gastos, así como en la inversión pública.

Por entonces, en efecto, el Estado aportaba el 23.3% del PIB, y alrededor de dos tercios de esa suma procedían de las empresas estatales, en las que a su vez, en esos años fue decisivo el rápido crecimiento de Pemex, que por sí sólo concurría con el 10% del PIB. El peso de la inversión pública también aumentó, aunque en menor medida, hasta poco más del 46%, y aquí también la mayor parte provino de las empresas con participación estatal.

Si se examina, además, la composición del PIB estatal en los últimos años se advierte que pierde importancia relativa el gobierno y la ganan las empresas, pues de 1975 a 1986, la participación del primero declina del 55.2% al 34.7%, en tanto que la de las empresas aumenta del 44.8% al 65.3%, después de alcanzar 71.2% en 1983.

El análisis de la composición del PIB del sector público, por actividades económicas, muestra también tendencias que ayudan a comprender la dirección en que se desenvuelve. Así por ejemplo: si se recuerda lo que ocurría digamos hacia fines de los años cuarenta, en que el grueso de la inversión y la producción correspondían a comunicaciones y transportes, servicios sociales y públicos y actividades agropecuarias, se aprecia mejor que el principal cambio hasta ahora consistió en la cada vez mayor importancia de la industria, lo que a su vez obedece al rápido desarrollo de la eléctrica y la petrolera, y en menor escala al de la siderurgia y otras manufacturas.

Y si sólo se considera el último decenio se aprecia que:

— Los servicios públicos o comunales que en 1976 concurren con el 57.3% del total, bajan al 28.9% en 1983 y aumentan de nuevo hasta el 35.0% en 1986;

— El PIB petrolero, que en 1976 sólo representa el 14.6%, alcanza un máximo de 51.1% en 1983, para caer hasta el 35.4% en 1986;

— Los servicios financieros, que en el primero de esos años sólo aportan el 2.8% del PIB estatal y el 3.1% todavía en 1981, en los siguientes 5 años suben hasta el 10.6%.

— Las manufacturas, que en 1979 llegaban ya al 7.3%, sobre todo después de 1982 descienden hasta el 4.5% en 1986, lo que claramente muestra su escasa significación, así como una tendencia descendente.

Política del actual gobierno

Para entender mejor lo que ocurre con las empresas estatales en los últimos años, conviene recordar al menos los aspectos principales de la política del actual gobierno en esa materia.

En su primer Informe al Congreso de la Unión, en septiembre de 1983, el presidente De la Madrid declaró:

“Las empresas públicas constituyen un importante instrumento para el logro de los objetivos nacionales; refuerzan la rectoría del Estado en la vida económica y social, son baluarte de nuestro nacionalismo [...]” “Su campo de operación está fijado en la Constitución y en las leyes [...] En la mayoría de los casos, la envergadura de sus proyectos y los requerimientos de capital [...], su baja rentabilidad y la necesidad de que estas actividades se mantengan bajo el control nacional, han hecho imposible la participación de capital de los particulares [...]”

“Mi administración mantendrá y profundizará el desarrollo de la industria paraestatal [...] El Plan Nacional de Desarrollo marca el rumbo y da prioridad a los bienes de capital y sus componentes, a insumos estratégicos y ramas de interés primordial para sostener el bienestar de la población de menores ingresos [...]”

En otro momento, el propio primer magistrado expresaba: “El sector paraestatal influye de manera decisiva en la economía, ya que aporta la tercera parte del producto industrial, genera 700 mil empleos, realiza alrededor del 80 por ciento de las exportaciones [...], produce insumos estratégicos y está presente en las ramas de cuyo desarrollo depende en buena medida la modernización del aparato productivo [...]” De

todo esto se advierte que, al inicio de su administración, el presidente De la Madrid reconocía la innegable importancia de las empresas paraestatales para el desarrollo económico nacional.

En el propio año de 1983 se hicieron reformas significativas a la Constitución Política.

En el artículo 25 se estableció que: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la soberanía de la Nación y el régimen democrático [...]". Se dispuso, además, que "El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorgue esta Constitución [...]"

Y unos párrafos adelante se añadió que: "El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28 [...], manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan". Y "Asimismo, podrá participar, por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo".

El Art. 26, por su parte, aclara que "El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación".

Y el Art. 28 dispone que: "No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas [...]: acuñación de moneda; correos; radiotelegrafía y la comunicación vía satélite; emisión de billetes por medio de un solo banco [...]; petróleo y los demás hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; electricidad; ferrocarriles; y las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión". Y enseguida se agrega que "[...] el servicio público de banca y crédito [...] será prestado exclusivamente por el Estado [...] en los términos que establezca la correspondiente ley reglamentaria [...]", y que "El Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado".

Varias cosas quedaron claras con la reforma constitucional.

En lo que hace a la definición de las áreas estratégicas que, a un año de la nacionalización de los bancos el gobierno quería precisar, por un lado, que el sistema de crédito seguiría

en poder del Estado —aunque a la postre se admitió que los particulares participaran hasta con el 34% del capital—, y por el otro, que no se pretendía llevar la nacionalización más lejos y afectar a otros grupos de empresarios privados. Las áreas estratégicas quedaban bien definidas, lo que debía ser tranquilizador para los capitalistas; y a la vez, dado el carácter necesariamente cambiante de todo, y en particular de lo estratégico, el gobierno dejaba la puerta abierta a la posibilidad de que en un momento dado, el Congreso dictara una ley que atribuyera tal carácter a otras actividades. En la práctica, empero, los hechos demostrarían que las expresamente mencionadas en el artículo 28 constitucional eran lo importante, pues en cinco años de acaso la más dura crisis que el país haya sufrido, el Congreso no expidió ninguna ley que ampliara el radio de acción del Estado a nuevos campos que pudieran considerarse estratégicos.

En cambio, lo que no quedó claro entonces ni lo está ahora es el alcance de las áreas o actividades prioritarias. La ley no definió tal concepto, y las autoridades expresaron opiniones ambiguas, imprecisas y aun contradictorias. En varias ocasiones se insistió en la significación de la presencia del Estado en la industria siderúrgica, automotriz, de fertilizantes, azúcar y otras. En el Informe presidencial de 1983 se subrayó, además: “Seguimos concediendo una alta prioridad a la industria de bienes de capital, porque sólo a través de ella podremos asegurar la reproducción de nuestro aparato productivo y reducir la dependencia económica del exterior. Y todavía en el cuarto Informe, en 1986, después de recordar cuáles eran hasta entonces las entidades estratégicas, se añadía: “[...] el Estado interviene como propietario con mayoría de acciones de empresas consideradas como prioritarias y que son productoras de bienes y servicios para el mercado; tal es el caso de la siderurgia, los fertilizantes, la producción de azúcar, los astilleros, entre otros rubros [...]”

Desde el principio de la administración, asimismo, se señaló que se iniciaba “una labor de reordenación de las empresas del Estado”, que revisaría la presencia de éste “[...] en las actividades no comprendidas en las prioridades anteriores. Se trata de empresas pequeñas y medianas con escasa influencia en el comportamiento de sus ramas productivas [...]” Sobre todo desde 1985, se insistió en que se aspiraba a elevar la productividad y eficiencia de las empresas públicas, a mejorar su administración, corregir sus desajustes financieros y, en general, racionalizar el funcionamiento del sector paraestatal. Más tarde, abiertamente se reconoció que éste “[...] debía hacerse más eficiente a través de la restructuración, venta, liquidación, fusión o transferencia del mayor número de enti-

dades que sea posible".³ Y en 1986 se expide la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que fundamentalmente tiende a facilitar el funcionamiento de las mismas, a liberarlas de controles innecesarios, a mejorar su supervisión y a facilitar y hacer más fluida su relación con el Gobierno, con todo lo cual se aspira a afirmar y ampliar su autonomía de gestión. Conforme a esta Ley quedaron fuera del sector paraestatal las empresas con participación minoritaria del gobierno, es decir, de entre el 25% y el 50% del capital, así como los fideicomisos digamos más endebles o circunstanciales, que no llenaban ciertas condiciones mínimas de organización y permanencia. Y con base en tal disposición, salieron del sector de que hablamos 40 empresas de participación minoritaria y 9 fideicomisos.

Alcance de la "desincorporación"

Según estimaciones oficiales, a diciembre de 1982 había 1 155 organismos estatales, distribuidos como sigue:

<i>Total</i>	1 155
Empresas de participación mayoritaria	750
Empresas de participación minoritaria	65
Fondos	233
Otras entidades	107

Hasta abril de 1986, la restructuración y desincorporación afectó a 458 entidades, de las que 269 fueron liquidadas; 101 vendidas y 88 fusionadas o transferidas. La mayor parte de dichas entidades fueron empresas de participación estatal mayoritaria: 270.

De las empresas estatales afectadas —incluidas las minoritarias—, o sea un total de 310, el grueso de ellas —185— son industriales, 29 agrícolas, 14 de turismo y 13 de comunicaciones y transportes. Y de las 101 empresas vendidas, 84 son industriales.

De las 458 entidades que se autorizó desincorporar, sin embargo, hasta la fecha antes señalada sólo se había afectado a 140, distribuidas como sigue: 76 se liquidaron; 34 se vendieron y 30 se fusionaron.

³ *El Mercado de Valores*, Año XLVI, Núm. 46. Noviembre 17 de 1986.

El proceso de desincorporación siguió adelante, y para abril de 1988 afectó a otras 245 entidades. De éstas, 130 fueron vendidas, 118 liquidadas o extinguidas y 15 fusionadas o transferidas, lo que hace un total de 703 entidades desincorporadas, de las que a su vez, 387 desaparecieron, 231 fueron vendidas y 103 se fusionaron o transfirieron. Lo que quiere decir que de las 1 155 entidades de diverso tipo que operaban al inicio del actual gobierno —más 59 creadas con posterioridad—, a la fecha sólo quedan 452.⁴

Según una reciente declaración pública del Secretario de la Contraloría, la negociación de las empresas estatales dejó al gobierno poco más de 900 mil millones de pesos —deducida la suma de 75 mil millones de pesos asumidos por él—, y contribuyó a reducir el déficit presupuestal.⁵ Y con frecuencia se repite, también, que la desincorporación no sólo no ha debilitado al sector paraestatal sino que incluso lo ha fortalecido. Para saber qué es lo que realmente ocurre es preciso ver más de cerca el problema.

Las diversas formas de afectación

Buena parte de las entidades desincorporadas, como ya dijimos, son aquellas que se han liquidado. En general, se incluyen aquí varios bancos relativamente pequeños y que no formaban parte de los principales grupos, numerosos fideicomisos y algunas empresas de participación estatal mayoritaria y minoritaria, sobre todo agropecuarias, pesqueras, de transportes y comunicaciones y en menor escala comerciales y de servicios varios. Tres de importancia fueron *Uramex*, *Fundidora Monterrey* y la quiebra de *Aeronaves de México*.

Entre las entidades transferidas destacan empresas de alcance regional en actividades agropecuarias, mineras y de servicios, así como fideicomisos ligados también a diversas regiones; y en lo que hace a ventas de paraestatales, sobresalen, como ya se dijo, empresas fundamentalmente industriales, sobre todo dentro del sector de energía, minas e industria paraestatal, el de turismo, y en menor escala el de agricultura y recursos hidráulicos.

Las actividades en que se distribuyen las empresas vendidas son muy variadas: minería, cemento y otros materiales de construcción, automotriz y otras industrias de bienes de capital, de electrodomésticos, química, papel y productos forestales, textil, alimenticia, cinematográfica, hoteles y servicios turísticos y bienes raíces.

⁴ Jorge Tamayo. *El Cambio Estructural en la Empresa Pública*. El Heraldo de México, p. 1, 18 de mayo de 1988.

⁵ *El Financiero*, 2 de mayo de 1988.

La información pública, en particular acerca de las empresas vendidas, es insuficiente. Según algunas publicaciones especializadas, notas de la prensa diaria y otras fuentes, entre ellas figuran:

— Varias decenas de empresas —más de 40— ligadas al Banco Mexicano *Somex*, concretamente a *Fisomex*. Entre las más importantes de este grupo podría mencionarse a la casa de Bolsa Acciones Bursátiles *Somex*, que se vendió en cerca de 21 mil millones de pesos, al parecer conforme a la idea de que los bancos debían quedar fundamentalmente en poder del Estado, pero los demás intermediarios financieros ser negocios privados. Del propio grupo *Somex* se vendieron *Cloro de Tehuantepec*, en alrededor de 40 mil millones de pesos; *Fibras Nacionales de Acrílico (Finacril)*, en 40 millones de dólares; *Poliestireno y Derivados* en cerca de 30 mil millones de pesos; *Poliestireno Monterrey*; *Porcelanas Euromex* en una suma que desconocemos, y otras como *Mecánica Falk*, *Tereftalatos Mexicanos* y *Glicoles Mexicanos* (ambas minoritarias), *Manufacturera Corpomex*, *Aceros Esmaltados*, *Estufas y Refrigeradores Nacionales* y otras fábricas de electrodomésticos; *Atsugi Mexicana*, *Inmuebles y Equipos Industriales*; el grupo *Garcí Crespo*, compuesto por 7 empresas, y muchas otras, como por ejemplo *Vehículos Automotores Mexicanos (VAM)*, vendida con anterioridad. Aparte de estar ya ofrecidas en venta *Sosa Texcoco* y otras.

— La Nacional Financiera, por su parte, ha vendido alrededor de otras cuarenta empresas, algunas promovidas por ella y otras adquiridas en diversas condiciones y financiadas durante años, de acuerdo con la política seguida sobre todo a partir de los años cincuenta, de que dicha institución debía jugar un papel muy importante en la promoción y apoyo del desarrollo industrial.

En la ya larga lista de empresas vendidas por *Nafinsa* bajo el actual gobierno destacan *Atenquique* —celulosa y papel— y su filial *Unión Forestal de Jalisco y Colima*, que dejaban buenas utilidades, se traspasaron en 53 mil millones de pesos. Otras empresas madereras fueron *Chapas* y *Triplay*, *Maderas Industrializadas de Quintana Roo*, *Productos de Maderas Finas* y *Servicios Forestales*, que en lo fundamental se vendieron también a grupos privados.

En otros campos destacaron las participaciones en *Mexicana de Aviación*, *Industrial San Cristóbal*, *Tubos de Acero*, *Industrias Negromex*, *Interruptores de México*, *Alimentos del Fuerte*, *Textil Manufacturera del Salto*, *Avantram Mexicana*, *Talleres Tlajomulco*, *Equipos Automotores*, *Accesorios Tubulares* y *Turbinas y Equipos Industriales*, así como varias minoritarias en empresas como el grupo *Indelta*, *Ceser*, *S. A.*, *Cen-*

trifugas Broadvent, KSB, Glicoles Mexicanos y Cía. Industrial y Comercial Americana, Y según la propia Nacional Financiera a precios de enero de 1988, las empresas vendidas por ella se negociaron en 409 119 millones de pesos.⁶

— Desde luego fueron importantes también las ventas de Renault de México, *Dina Cummins*, así como las actualmente en proceso de: Fábricas de Tractores Agrícolas, Tetraetilo de México, *Dina Rockwell*; Diesel Nacional, en sus diversas líneas de autobuses, camiones y motores; Motores Perkins, *Sidena* y otras, así como las de empresas como Hules Mexicanos, *Indelta*, Concretos Procesados y Cementos Anáhuac del Golfo.

De las empresas estrechamente ligadas a Altos Hornos se vendieron 8, entre otras: Fábrica Nacional de Máquinas Herramienta, Tubería Nacional, Procesadora de Acero Rassini y Hierro y Barreras de Acero.

— En la industria azucarera, recientemente reorganizada y en la que no hace mucho tiempo el Estado compró un buen número de ingenios privados, ahora se liquidaron 5 y vendieron o están ofrecidos 18 más, destacando entre estos últimos los ingenios: Atencingo, El Cora, Casasano, 14 de Septiembre, San Francisco, Miguel Hidalgo, Rosales, La Primavera, Puga, Independencia, Oacalco, La Chontalpa, Puruarán y otros.

En la industria pesquera y concretamente del grupo de Productos Pesqueros Mexicanos se liquidaron varias empresas, se vendieron otras y están negociándose muchas más como Productos Pesqueros de Totolobampo, del Pacífico, de Isla de Cedros, de Sinaloa, de Campeche y Salina Cruz; todo ello además de haberse disuelto varios fondos de apoyo a la pesca.

En la industria cinematográfica se ha modificado también grandemente la política estatal, liquidándose algunas empresas, fusionándose las más, y vendiéndose otras. Y en el área hotelera y turística el repliegue del Estado ha sido aún mayor, vendiéndose unas 20 empresas encabezadas por Nacional Hotelería, y varias de las cuales, al parecer, operaban con resultados financieros satisfactorios.

Ya dijimos que no obstante la obvia importancia de muchas de las empresas vendidas, el Estado sostiene que ninguna de ellas era estratégica ni prioritaria. Lo que de ser así, indicaría que la política en curso no ha cambiado, y que quienes hablan de que el llamado sector paraestatal se está debilitando y aun desmantelando, carecen de razón. Veamos lo que realmente acontece, en particular, en tales campos.

En cuanto a actividades de orden estratégico se advierten varios hechos de interés. El primero consiste en que la polí-

⁶ Véase "Transferencia de empresas con participación Accionaria de Nacional Financiera", en *El Mercado de Valores*, Núm. 3, febrero 10, de 1988, Año XVIII, pp. 10-11.

tica al respecto es un tanto defensiva e indudablemente débil. En efecto no obstante la gravedad de la crisis que México ha vivido en el último sexenio, hasta ahora se consideró que ninguna otra actividad —aparte de las señaladas en el artículo 28 constitucional— merecía la calificación de estratégica. En condiciones tan adversas como las que el pueblo mexicano tuvo que encarar en los últimos años, en que una inflación sin precedentes deprimió como nunca antes su nivel de vida, pudo haberse asignado carácter estratégico a la producción de ciertos alimentos básicos, de algunas medicinas fundamentales y a servicios como el transporte aéreo, cuya importancia es ya muy grande y seguramente será mayor en los próximos años, no sólo como un medio para mover carga y pasajeros, sino como un vehículo de integración nacional, de primer orden. Lo cierto, sin embargo, repetimos, es que no sólo no se avanzó en tal sentido sino que, en materia de alimentos incluso se permitió que se especulara impunemente a costa de las capas más modestas de la población, y en tratándose del transporte aéreo, el Estado, lejos de reforzar su participación, acabó vendiendo las acciones en Mexicana de Aviación y llevando a la quiebra a Aeronaves de México (*Aeroméxico*).

Pero quizá lo más grave de lo acontecido en los últimos años consista en que, por decreto del 13 de octubre de 1986, el gobierno, a través de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, resolvió que numerosos productos petroquímicos básicos, que hasta entonces se consideraron estratégicos y que desde que se expidió la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, en 1958, sólo podían ser producidos por el Estado por ser parte integrante de la industria petrolera nacionalizada, ahora se dejan a la empresa privada mexicana e incluso extranjera. ¿Por qué? Según el Decreto antes mencionado porque el desarrollo industrial lo demanda, porque conviene a la reconversión industrial y porque es necesario aumentar la producción de petroquímicos básicos y secundarios para satisfacer la creciente demanda interna e impulsar la exportación. Y la medida se atribuye, además, a razones financieras, y a que dados los bajos precios del petróleo y la disminución de ingresos de Pemex, habría sido muy difícil hacer las cuantiosas inversiones necesarias para superar el actual déficit de petroquímicos básicos.

Aun sin poner en entredicho la validez de tales argumentos, lo que a nuestro juicio es grave es que una decisión de tanta importancia se haya tomado de manera burocrática y como si fuera un asunto administrativo menor, sin intervención del Congreso de la Unión pese a que afectaba el régimen legal

de la petroquímica básica, y "desincorporaba" nada menos que ciertas actividades que según la Constitución son estratégicas.

De acuerdo con la resolución ya mencionada, quedan como petroquímicos básicos 34 productos, en tanto que pasan a ser secundarios 36: entre otros el acetato de vinilo, ácido acrílico, acroleína, N-butanol, butiraldehído, cloruro de etilo y de metileno, dicloruro de propileno, etilhexanol, óxido de propileno, polibutidenos, polipropileno y otros.

La nueva política está en marcha, y ya en marzo de 1987 la *Semip* autorizó a diversas empresas privadas a operar en nuevas líneas. La empresa Acrilatos elaborará ácido acrílico y acroleína; Aquaquim producirá óxido de etileno; Celanese elaborará, entre otros, ácido 2-til hexoico y óxido de mesitilo, y el Grupo *Primex* producirá cloruro de polivinilo, anhídrido ftálico y plastificantes.

Una siguiente cuestión, sin duda también muy importante, es la relativa a las actividades prioritarias, que si bien no son exclusivas del Estado, suelen tener una obvia significación para el desarrollo económico de nuestro país. Ya dijimos que, en tanto que lo estratégico está formalmente establecido en la Constitución, lo prioritario nadie sabe, a punto fijo, en qué consiste. Y aunque ciertos funcionarios reiteran a menudo que ninguna empresa prioritaria se ha vendido, lo cierto es que no pocas a las que incluso el actual gobierno asignaba tal carácter —como ciertas empresas automotrices y que fabrican bienes de capital, de tractores, vinculadas a la industria siderúrgica, química, azucarera y de astilleros se han vendido o están por ofrecerse a empresarios privados.

Entre las primeras empresas vendidas por el actual gobierno estuvieron las automotrices Renault de México y VAM (Vehículos Automotores Mexicanos). Y tras esas operaciones puede decirse que el Estado, que desde años atrás había tratado de estar presente en esa importante industria, la dejó en su totalidad al capital privado, que en este caso es extranjero y pertenece en exclusiva a unas cuantas firmas trasnacionales: las tres grandes de los Estados Unidos —GM, Ford y Chrysler—, Volkswagen y Nissan.

En lo que hace a la industria automotriz, y concretamente a la fabricación de autobuses y camiones, fue también significativo el desmantelamiento de Diesel Nacional. La presencia del Estado en este campo no fue fruto de la improvisación. Se trabajó en él a lo largo de años, pues como se sabe, el autotransporte es en México fundamental tanto debido al rápido crecimiento urbano como al atraso de los ferrocarriles,

al rezago del metro en la capital y otras grandes ciudades, y a la política de construcción de caminos seguida desde fines de los años veinte.

Como ya dijimos, actualmente están en proceso de venta las principales divisiones de *Dina* —motores, autobuses y camiones—, así como otras empresas aledañas: Motores Perkins, Mexicana de Autobuses, Plásticos Automotores, Moto Diesel, *Dina* Rockwell y Manufacturera de Cigüeñales, y ya vendidas *Dina* Cummins y Manufacturera de Partes de Automóvil. Lo que quiere decir que, por razones todavía no suficientemente claras pero que sin duda benefician a unos cuantos grandes consorcios privados el Estado ha abandonado un campo muy importante de la industria de bienes de capital, después de que, con tropiezos, fallas y múltiples problemas, había sin embargo logrado también avances que pudieron haber sido la base y punto de partida de una política totalmente distinta.

Otro campo en el que la política del gobierno cambió recientemente de rumbo es el de la fabricación de tractores agrícolas. Siderúrgica Nacional (*Sidena*) era la única empresa que los hacía y la única, también, que fabricaba motores diesel para tractores, así como los componentes y maquinados necesarios, y además ensamblaba tractores pequeños, a partir de un convenio con la Unión Soviética.

Durante mucho tiempo nadie —incluyendo a la propia *Semip*— dudó del carácter prioritario de *Sidena*. Y en efecto ésta era la única fundidora de hierro gris principalmente para monoblocks de motores diesel, que utilizaban Ford, John Deere, Perkins y Cummins. En hierro gris se fundían además todas las tractopartes, y en acero, los trucks para carros de ferrocarril, que incluso llegaron a exportarse. En este campo *Sidena* competía ventajosamente con FHASA y otras empresas, y además fundía piezas diversas para la minería y *Pemex*. En aceros especiales tenía también buena calidad, aunque debido a cierto rezago tecnológico empezó a perder terreno frente a Aceros Solar. Y en fundición de aluminio auxiliaba a la industria automotriz. En fin, los convenios que *Sidena* había hecho con Ford y con la URSS para fabricar tractores eran ventajosas para el país, y desde que se separó de *Dina* y Carros de Ferrocarril, empresas a las que en cierto modo subsidiaba, *Sidena* empezó a tener mejores resultados financieros, operando en campos básicos. Pero todo ello se tiró por la borda, y las cuatro divisiones fundamentales —motores, tractores fundición de hierro y aceros especiales—, se desgajaron y están vendiéndose por separado.

En materia de construcción naval, rama también prioritaria, sobre todo en un país con 10 mil kilómetros de litoral,

el reajuste ha afectado a varias empresas. Algunos *fidelcos*, misos de apoyo se liquidaron, lo que también se hizo con Astilleros de Veracruz, y hace unos meses se anunció que se vendería Astilleros Unidos de Ensenada, empresa fundamentalmente de reparaciones que opera en condiciones satisfactorias.

En la industria química y petroquímica ha sorprendido la venta de varias empresas importantes como Cloro de Tehuantepec, Sosa Texcoco, Adhesivos y, con participación minoritaria, Tereftalatos y Glicoles Mexicanos. Y en otros campos la de Tetraetilo de México.

Pero lo que probablemente más ha preocupado en amplios círculos, a menudo no ajenos al propio Estado, es que tras años de promover una creciente intervención estatal en la industria de bienes de capital, el actual gobierno, en una actitud verdaderamente liquidacionista, ha dado marcha atrás en este campo tan importante —empezando como antes vimos con la industria automotriz—, pese a que hasta hace poco tiempo se señalaba que en la presente fase del desarrollo industrial del país, la presencia del Estado era necesaria, pues dada la debilidad del capital privado mexicano, sin ella las principales actividades quedarían en poder del capital extranjero.

Independientemente de otros esfuerzos, los desplegados directamente por el gobierno, por la Nacional Financiera y el Banco Mexicano Somex en ese campo fueron, sin duda, importantes. Y lo fueron no sólo por la significación de las industrias de bienes de capital sino porque, en un sentido más amplio, tal política mostraba la decisión de participar en el desarrollo industrial en su conjunto.

Pues bien, ya hicimos referencia a la venta de empresas automotrices como Renault, VAM y Diesel Nacional, a las que habría que añadir la de Mexicana de Autobuses, actualmente en proceso de negociación.

Pero además hay muchas otras: por ejemplo la Fábrica Nacional de Máquinas Herramienta (fabricante de tornos) del propio Altos Hornos; *Tracsomex* (tractocamiones); *Indetel* (equipos de telecomunicaciones); Manufacturera Fairbanks Morse (equipo eléctrico industrial); Moto Diesel (motores); Turborreactores (reconstrucción de turbinas para avión); Centrifugas Broadvent (centrifugas azucareras); Compañía Mexicana de Radiología (equipos de rayos X); *Dina* Komatsu (tractores y cargadores de oruga); Oerlikon Italiana (fresadoras); y varias que en realidad no llegaron a operar como *Turalmex* (turbinas térmicas) y Turbinas y Equipos Industriales (turbinas hidráulicas), NKS (grandes piezas, ejes y cigüeñales de motores navales), que en general habían sido

promovidas por el Estado, así como otras del grupo *Nafinsa* que competían con empresas privadas, como Manufacturas Metálicas Pesadas y Empresas Industriales del Hierro (pailería pesada y diversos tipos de maquinaria y equipo), con el grupo ICA; Compañía Industrial y Comercial Americana (medidores de agua); IEM (transformadores de alto voltaje y equipo eléctrico industrial), Motores Perkins (diesel), ya mencionada, KSB (bombas de gran caudal), que al parecer se había ofrecido en venta pero que sigue en poder del Estado, *Swecomex* (equipo termodinámico) y Telettra Industrial (equipo de microondas), todas ellas industrias de bienes de capital que en su mayor parte fueron también vendidas o están en proceso de venta.⁷

La decisión de promover tales industrias, a menudo no sin grandes dificultades, no fue arbitraria. La industrialización sustitutiva había logrado importantes avances, sobre todo en bienes de consumo y en ciertos bienes intermedios, los que sin embargo seguían procediendo a menudo del extranjero. Pero en tratándose de bienes de capital, el rezago era y es manifiesto y grave. Se requería avanzar en esta nueva dirección y aprovechar la base industrial ya instalada y la disponibilidad de recursos financieros que el petróleo y el crédito externo hacían posible. Desde principios de los años setenta empezó a trabajarse en ese sentido, y tal política se continuó, sin dudarse del carácter prioritario de la industria de bienes de capital ni de la importancia de producir ciertas materias primas y materiales básicos. Los problemas, sin embargo, no se hicieron esperar. En verdad faltó una estrategia bien definida; se carecía de experiencia y de administradores competentes; a menudo se hicieron las instalaciones previstas, pero sin tener resuelto cómo financiar la producción al empezar a operar; la inflación en marcha afectó los costos y la crisis, que en general no fue siquiera prevista, dificultó las ventas y a veces obligó a competir con grandes proveedores extranjeros que incluso ofrecían sus equipos a precios de dumping. Y cuando la liquidez financiera se acentuó y la política contraccionista sugerida por el Fondo Monetario entró en acción, casi todas las empresas antes mencionadas empezaron a sufrir las consecuencias.

Lo hecho en cuanto a productos intermedios básicos fue también importante, y por ello es tanto más sensible el retroceso que en este campo se produjo. Lo que fundamentalmente se buscaba aquí era impulsar la producción de cobre, acero,

⁷ Para otros datos sobre algunas de las empresas antes mencionadas, véase: Benito Rey Romay, *La Ofensiva Empresarial contra la Intervención del Estado*, Siglo XXI, México, 1984.

azufre, petroquímicos básicos y secundarios, abrasivos y otros productos fundamentales.

En cobre, por ejemplo, el Estado apoyó grandemente tanto a Minera de Cananea como a La Caridad (grupo Larrea), con aportaciones de capital, créditos directos y avales multimillonarios, y cuando la primera de ellas se había reorganizado y modernizado, el gobierno anunció la venta de sus acciones al grupo *Protexa*, con el que sin embargo surgieron problemas todavía no resueltos.

En otros campos importantes se hicieron también ventas discutibles. Electrometalurgia de Veracruz, por ejemplo, controlaba la producción de materiales abrasivos esenciales para la industria metalmecánica, y lo mismo ocurrió con la Productora Mexicana de Fármacos, que se proponía producir ácido ascórbico, y con muchas otras empresas, en parte ya mencionadas, y que en su mayoría fueron ya vendidas o están en venta, incluyendo aquellas que, como Atenquique, dejaban buenas ganancias y en las que la sola utilidad obtenida en 1987 ya por el grupo Durango que la compró, hizo posible recuperar en un solo año gran parte del precio pagado por ella.

Refiriéndose a la venta de ciertas empresas estatales, en un reciente análisis se hace notar que "Con el cambio de manos de estas empresas se podrían alterar los programas de equipamiento industrial y sustitución de importaciones. El peligro más serio sería la desaparición de uno de los pilares básicos de la economía, afectando el grado de integración de la planta industrial, las cadenas productivas y generar indeseables situaciones de monopolio". La desincorporación "implica cierta ruptura en el encadenamiento productivo [...] en la industria paraestatal, que se había logrado a lo largo de varios años en los que el Estado inyectó cuantiosos recursos en proyectos industriales de larga maduración [...]" "Estos complejos productivos han quedado rotos o seriamente dañados sobre todo por la venta de empresas que se integraban a los complejos siderúrgicos (FHASA) Torres Mexicanas, Envases Continental, Estructuras de Acero, Refractarios Mexicanos); energéticos (grupo industrial NKS, Distribuidora de gas natural, Interruptores Mexicanos, *Turalmex* y Turbinas y Equipos Industriales y petrolero-petroquímicos (Cloro de Tehuantepec, *Finacril*, Glicoles, *Humex*, Polidesa y Tetraetilo de Plomo)".⁸

Y en el mismo sentido, otros comentaristas advierten que "La propia industria paraestatal será la más afectada por los

⁸ Centro de Información y Estudios Nacionales. *Análisis mensual* 97, abril de 1988, pp. 13 y 14.

efectos de la desincorporación de empresas paraestatales al romperse los eslabones productivos que en las dos últimas décadas había impulsado el gobierno [...]”⁹

A nuestro juicio, además, no sólo la industria resiente la venta de empresas paraestatales, sino incluso el propio sistema bancario. Curiosamente, en primer lugar, pese a que ya pasaron seis años de la nacionalización bancaria de 1982, el país sigue sosteniendo demasiados bancos —más de veinte— lo que a todas luces se antoja excesivo e innecesariamente costoso. En segundo lugar, la forma en que se procedió al nacionalizar la banca, dejando en manos privadas una serie de servicios financieros auxiliares, porque en un sentido estricto no correspondían al ejercicio de la banca y el crédito, alteró formas de integración y de funcionamiento que —como la banca múltiple— respondían a realidades que fueron en gran parte desconocidas, y a la postre tal política resultó en un debilitamiento de los bancos. Y por último, tanto al nacionalizar los bancos privados —y vender muchas de las empresas en que tenían intereses—, como al “desincorporar”, y concretamente al vender otras en las que, como hemos visto, participaban *Nafinsa*, *Somex* y otros bancos estatales, se rompió con la tendencia histórica, explicable sobre todo en un país económicamente subdesarrollado, a crear un tipo de banca que apoyara directa y significativamente el desenvolvimiento industrial. Y debido a ello, ahora nos encontramos en una situación desfavorable, en la que en realidad hemos retrocedido, debilitándose el apoyo bancario a la industria sobre todo en líneas productivas nuevas muy importantes. En vez de ello, los principales bancos del país, ya nacionalizados se han vuelto en buena medida bancos de depósito de tipo tradicional, y la propia banca de inversión o de desarrollo, bajo la influencia de la política de “desincorporación” y en general de la crisis y de la política neoliberal en boga, ha debilitado su labor de promoción y retirándose de campos en los que debería participar activamente.

La desincorporación y el déficit presupuestal

Con frecuencia, como es sabido, se sostiene que el interés del Estado en deshacerse de múltiples empresas obedece a que entrañan una pesada carga financiera. Y en realidad suele ser así, y no pocas empresas estatales exhiben además múltiples fallas que explican sus pobres resultados, aunque éstos se explican también, a menudo, porque dichas empresas subsidian al capital privado.

⁹ Alfredo Márquez. Francisco Vidal, en *El Financiero*, 8 de junio de 1988, p. 57.

El argumento anterior, sin embargo, es poco convincente en un doble sentido. En primer lugar, supone que el déficit presupuestal del Estado es la causa principal de la inflación, lo que es muy discutible y aun inaceptable. Y en segundo, sugiere que dicho déficit es en buena parte resultado de la operación ineficiente de las empresas vendidas y de los fuertes subsidios que éstas reclaman.

El gobierno, es cierto, transfiere por diversas vías enormes recursos financieros a entidades que, o bien se controlan presupuestalmente, o bien se manejan fuera del presupuesto. En 1987 tales transferencias superaron los 10.5 billones de pesos, y para el presente año de 1988 el presupuesto de egresos las estima en más de 17.7 billones.

Solamente por subsidios a diversos organismos y empresas, en 1987 el Estado destinó 785 300 millones de pesos, y más de 1 billón adicional por transferencias de capital. Pero si se examinan las cifras correspondientes se advierte que, más que las empresas vendidas, son otros organismos los que reclaman el mayor apoyo. En subsidios, por ejemplo, en 1987 *Fertimex* recibió 277 mil millones, *Conasupo* 169 800, la CFE 142 900, *Aeroméxico* 95 mil y los Ferrocarriles 26 300 millones. Y en transferencias de capital, la CFE recibió 651 300 millones de pesos, los Ferrocarriles 172 300, *Fertimex* 68 800, *Sicartsa* 63 500 y Altos Hornos 28 900. En cuanto a apoyo para pagos de pasivos e intereses, suma por cierto también enorme y que sólo en 1987 reclamó más de 2 billones de pesos, la *Conasupo* recibió 756 600 millones, la CFE 431 300, los Ferrocarriles 270 800, *Sicartsa* 173 700, *Fertimex* 158 700, *Sidena* 137 300, varias empresas azucareras 95 600 y *Aeroméxico* 90 800.

Y aun si algunas empresas de las que se han vendido operaban con resultados desfavorables, es obvio que esa no era razón bastante para deshacerse de ellas, y que, en todo caso, debieron haberse reorganizado.

Y ¿quién adquiere las empresas vendidas?

En la información oficial sobre la llamada "desincorporación", se subraya que el Estado deja de operar ciertos organismos y empresas; y éste es un hecho importante. Pero más interesante y útil sería saber a quién vende y qué mueve a los compradores. Una cosa obvia es que las empresas vendidas no deben haber andado tan mal, porque de ser así difícilmente habría habido quién se interesara en ellas. De algunas, se sabe que obtenían ganancias, y esto las hacía atractivas. De otras se dice que si bien tenían dificultades, los bajos pre-

cios a que se vendieron eran muy favorables a quienes las compraron. Y otras más tenían importancia u operaban en campos exclusivos.

Ya dijimos que, desafortunadamente, tenemos poca información acerca de quiénes son los nuevos dueños de las empresas vendidas por el Estado. Al respecto alguien podría pensar que probablemente se han repartido entre centenares y aun miles de empresarios, pero más bien parece que unos cuantos grandes consorcios privados han sido los principales adquirentes.

Tan sólo a manera de ilustración, a juzgar por ciertas fuentes y según personas bien informadas, sobre todo del sector privado:¹⁰

- Vitro compró a *Somex* el consorcio *Prodomex*, que incluía a Acros y otras empresas de electrodomésticos y estufas, así como *Manufacturera Corpomex*;
- Cementos Mexicanos, o sea el grupo más fuerte en su ramo, adquirió Cementos Anáhuac, Concretos Procesados y Concretos Tamaulipas;
- Peñoles compró a la Comisión de Fomento Minero su parte de capital en Refractarios Mexicanos;
- El Grupo *Nacobre* adquirió *Indelta*;
- Acciones Bursátiles *Somex* quedó en manos de un grupo privado promovido y apoyado por *Banamex*;
- Atenquique y sus filiales fueron comprados por el grupo industrial Durango;
- Cloro de Tehuantepec fue vendida, a través de una casa de bolsa, al grupo *Primex* y a Química Pennwalt;
- La casa de bolsa *Inverlat* (Agustín Legorreta) tomó parte del capital y fue el conducto y representante del grupo privado (Hermanos Bours, de Sonora; Domecq, Losada (Gigante), Cifra (Aurrerá), y otros, que compró Nacional Hotelera;
- Hules Mexicanos quedó en poder de Serrano Segovia (antes Grupo Anáhuac).
- La participación estatal en Minera de Cananea fue ofrecida al grupo *Protexa*, aunque está pendiente de consumarse;
- Dina Cummins fue vendida a Cummins Engine y, según informa la prensa, la división de camiones de Dina, Motores Perkins y Motodiesel están negociándose con Chrysler;
- La rica mina Real de los Angeles quedó en poder del grupo *Frisco*;
- Garci Crespo fue comprado por Pepsi Cola;

¹⁰ Véase: Centro de Información y Estudios Nacionales, *La Economía Mexicana. Análisis Anual*. México, 1988, p. 181.

- En fin, Fibras Nacionales de Acrílico fue adquirida por el grupo *Kaltex* (Saba) y,
- El ingenio de Atencingo se vendió en 47 mil millones de pesos al grupo Escorpión (Coca-Cola).

O sea que tampoco es cierto que el país y la rectoría del Estado se hayan fortalecido por la venta de empresas paraestatales. Lo cierto es que algunas quedaron en poder de transnacionales extranjeras y, las más, de grupo monopolistas mexicanos que, en todo caso, son los que se refuerzan.

La "desincorporación" y los trabajadores

Los trabajadores, en cambio, han sido la parte débil y más lesionada por el cierre y venta de empresas estatales. Una empresa que se liquida o desaparece, es una fuente de trabajo que se cierra, lo que es especialmente grave bajo una crisis como la actual. La liquidación de numerosas empresas ha significado, tan sólo en el último quinquenio, centenares de miles de trabajadores desempleados. Los casos de Ayotla Textil, Fundidora Monterrey, *Aeroméxico* y otros sólo fueron de los más sonados. Con frecuencia se invalidan los contratos de trabajo en vigor o se sustituyen por otros más ventajosos para los patrones. A menudo se violan derechos fundamentales como el de huelga y se dejan de pagar prestaciones legales, o sólo se cubre una parte de ellas.

La modernización de Teléfonos de México —sobre todo en conmutadores y nuevo equipo digital—, los numerosos reajustes en otras tantas empresas y la reubicación de otras se han traducido en pérdida de la materia de trabajo, reacomodos desfavorables, desempleo y cancelación de ciertos beneficios. Los recortes en Altos Hornos, en *Dina*, *Sidena*, Carros de Ferrocarril y otras empresas afectaron a muchos trabajadores, que al final sólo obtuvieron una parte de las prestaciones a que tenían derecho. Las liquidaciones en otras empresas, en varios casos sólo alcanzaron el 50% de las legales. En la quiebra de *Aeroméxico* se incurrió en graves fallas procesales e incluso se violó el derecho de huelga, y el cierre de varias empresas vinculadas a la *Conasupo* perjudicó también a numerosos trabajadores.

Recientemente, un grupo de importantes sindicatos afiliados a diversas centrales obreras denunció graves violaciones a la ley y los contratos colectivos de parte del gobierno en el ejercicio de la política de "desincorporación". Y aparte de defender ciertas demandas laborales, plantearon la necesidad de "Luchar por el rescate histórico de la empresa na-

cional [...] por el significado que tiene para la defensa de la soberanía, la independencia y el desarrollo”, y “Luchar por el mejoramiento y mayor reinversión, mejor administración, racionalización de recursos, integración de la planta productiva y mayor trabajo y productividad de las empresas paraestatales [...]”¹¹

“Desincorporación”, crisis y CME

La política examinada en este artículo no es privativa de México. Se la encuentra hoy en Inglaterra, y en menor medida en Francia e Italia y también en Brasil, Venezuela, Nigeria, Pakistán y otros países.¹² Tal política responde en parte a la idea simplista y parcial de que el Estado es siempre un mal administrador y de que la empresa privada funciona mejor y puede contribuir a racionalizar la economía y hacerla más eficiente y competitiva en el exterior.¹³ En cierto modo este es uno de los rasgos y de las ideas dominantes en los “programas de ajuste”, que entre otras cosas recomiendan políticas restrictivas y contraccionistas, equilibrio presupuestal o al menos reducción del déficit a través sobre todo de la disminución del gasto e incluso de la inversión pública, apoyo a la inversión privada nacional y extranjera fundamentalmente monopolista, pago puntual de la deuda externa así sea sumamente oneroso, apertura comercial y financiera hacia el exterior, y reducción del salario real y del nivel de empleo para desvalorizar capital, intensificar la explotación de la fuerza de trabajo y, así, restablecer —a la manera ortodoxa— las condiciones del crecimiento. El FMI y los grandes bancos extranjeros recomiendan y aun tratan de imponer tal política, que desde luego acentúa la dependencia y frena e incluso impide el desarrollo económico.

En nuestra opinión la venta de las empresas paraestatales resulta de la crisis y de los desajustes que sufre la economía en su conjunto, y concretamente el funcionamiento del llamado sector paraestatal. A veces, inclusive, la venta de alguna empresa obedece a que al margen de otras consideraciones, el Estado —casi siempre en apuros— prefiere obtener de inmediato dinero fresco, aunque el precio que pague por él sea muy alto.

¹¹ “Por el rescate histórico de la empresa nacional e industria paraestatal”, *La Jornada*, 3 de febrero de 1988.

¹² Véase: M. Shirley. Desincorporación de Empresas Estatales en Países en Desarrollo. *Empresa Pública*, Vol. 2, No. 2, octubre de 1986.

¹³ Véase: Eficiencia Global de la Economía, de Juan M. F. Mattin. Encuentro Regional CLAD/ILPES/INAP. México, abril de 1988.

Un segundo factor es la política con la que, a partir de un diagnóstico erróneo, se intenta hacer frente a la crisis, y en un sentido más amplio, la estrategia de desarrollo que renuncia o ni siquiera se plantea la necesidad de cambios de fondo, sino que se conforma con ajustes superficiales, de poca monta y de corto alcance, principalmente en la órbita comercial y monetario-financiera, o sea en la esfera de la circulación.

Y en realidad ambos factores —crisis y política económica inadecuada— se conjugan, refuerzan y expresan en contradicciones que vuelven más inestable, deprimen y aun interrumpen la acumulación de capital.

Contra lo que piensan algunos, que las políticas neoliberales en boga —y en particular la Reaganómica— dejan atrás y aun invalidan el capitalismo monopolista de Estado, pareciera más bien que, bajo una crisis tan prolongada y severa y una política tan conservadora como las actuales, el Estado tiende a debilitarse, en tanto que ciertas fracciones del capital monopolista nacional y extranjero se refuerzan y alteran en su favor la relación Estado-monopolios.

El que el Estado se repliegue y reduzca el alcance de su intervención sobre todo en el proceso productivo no es, por tanto, signo de que deje de actuar el CME —en el sentido de ya no jugar el Estado un rol fundamental en el proceso de acumulación—, sino más bien de que cambia su forma de funcionamiento, y de que el capital monopolista privado —y en particular sus fracciones más poderosas e influyentes— ayudadas por funcionarios públicos tecnocráticos en buena parte a su servicio, en el contexto de una débil lucha de clases y de dispersión de los trabajadores y en general de las fuerzas democráticas, pueden afirmar sus posiciones, recuperar ciertas empresas, controlar otras y lograr que el Estado opere en la forma que les resulte más ventajosa, lo que desde luego incluye el control de los salarios. Lo que demuestra que las políticas “neoliberales” son en realidad incluso reaccionarias, y que sólo ofrecen mayor libertad al capital monopolista y la oligarquía financiera que en él se sustenta, en tanto que entrañan limitaciones y problemas de diverso orden para el capital no monopolista, y restricciones crecientes, férrea disciplina y mayor explotación, para los trabajadores.

En todas partes, y desde luego en un país subdesarrollado como México, es obvio que las empresas paraestatales debieran funcionar mejor. Adoptar la actitud apologetica de que el Estado todo lo hace bien es tan inadmisibile como sostener que todo lo hace mal. La crisis ha dejado claro que muchas empresas experimentan a menudo serias fallas. Con frecuencia sus directores son improvisados e inexpertos, incapaces y no

pocas veces deshonestos. Su administración suele ser costosa, burocrática e ineficiente, y sus niveles de productividad bajos.¹⁴

Crear que todas las empresas paraestatales, incluyendo a aquellas que arrastran problemas insolubles y carecen incluso de viabilidad debieran retenerse, es absurdo. Lo cierto es que es lamentable que se adquirieran, sobre todo cuando ello se hace sin justificación alguna y sólo para favorecer a algún influyente o porque así convenía a quienes lo decidieron. Pero tampoco es defendible una política como la actual, que resquebraja y debilita a numerosas empresas estatales, que acaba con otras, favorece al capital monopolista privado, tira por la borda esfuerzos y realizaciones de muchos años, y aun renuncia a una verdadera estrategia del desarrollo, a cambio de los ajustes —en realidad meros parches— que recomiendan ciertos empresarios, algunos tecnócratas conservadores y el Fondo Monetario.

La empresa pública y concretamente la presencia no sólo reguladora sino directa del Estado en el proceso productivo y sobre todo en ciertas ramas fundamentales de la industria, son hoy —y lo serán en adelante— fundamentales para impulsar el desarrollo de nuestro país. De los campos en que se opere y de la forma en que ello se haga dependerá que tal política contribuya o no a reforzar y defender nuestra soberanía.

El que se haga todo lo que ahora se hace no es, sin embargo, casual sino que tiene su razón de ser. La clase en el poder cree y por eso aplica y defiende —aunque no sin contradicciones— tal política. Cambiarla y reorganizar la acción del Estado en bien del país y del pueblo es indispensable, es incluso condición para defender eficazmente nuestra soberanía. Y por fortuna, en otro sentido, la defensa de ésta no es tarea de tales o cuales empresas sino, como dice el artículo 39 de la Constitución, del pueblo, pues la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y éste tiene el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Cambiar y reorganizar la acción del Estado en bien del país y del pueblo es indispensable. Pero esto supone la capacidad política y la decisión de hacerlo, o sea algo que nada tiene que ver con pedir peras al olmo.

¹⁴ Véase al autor de este artículo: "Capital Monopolista y Empresas Estatales" y "El Capitalismo Mexicano Hoy, III, El Estado y las Relaciones de Producción", en *Estrategia*, Nos. 14 y 38, de marzo-abril de 1977 y marzo-abril de 1981.